



# Las universidades públicas de Madrid están al borde del colapso económico

La oposición reclama más fondos; rectores y Gobierno negocian un plan de choque

ELISA SILIÓ, Madrid

Las seis universidades públicas de Madrid (Complutense, Autónoma, Alcalá, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos) viven en la cuerda floja. Tanto, que en el curso 2018-2019 les sobró solo un remanente de 1,15 millones entre las seis, con los que les habría resultado difícil cubrir eventualidades como, por ejemplo, los precios disparados de la luz que se han dado este año. Y ahora, además, dejan de recibir el dinero de sentencias ganadas al Gobierno madrileño (574 millones en cinco años) por financiación no entregada y que les estaba sirviendo de colchón. Están al borde de no poder pagar sus gatos corrientes y, ante esta situación extrema, toda la oposición de izquierda en la Asamblea de Madrid — Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE— registraron el miércoles una proposición no de ley en la que reclaman más fondos: “Es imposible que la Universidad de la Comunidad de Madrid sea referente de investigación y de docencia si los presupuestos no llegan a cubrir el 100% de los gastos, ni siquiera los de personal”. Las negociaciones entre el Gobierno de Díaz Ayuso y los rectores ya ha comenzado.

La Comunidad hace unas cuentas de su inversión en universidades —tres veces mayor que la media española, el 4,5% de su presupuesto— que no se corresponden con lo que afirman distintos informes encargados por su Gobierno (uno de la Fundación Europea Sociedad y Educación y otro de la Cátedra Unesco de la Politécnica de Madrid) y el último de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), una institución impulsada por grandes empresas.

“Madrid destaca por ser la segunda región con más ingresos por alumno en el capítulo de tasas, precios públicos y otros; y la de menos transferencias corrientes y de capital recibidas [por las universidades], si estas se dividen por el total de estudiantes”, remarca CyD en su análisis. Dicho de otra forma: Madrid es la segunda región que más cobra a las familias tras Cataluña y la que menos invierte por alumno.

“Por supuesto que desearíamos que las universidades pudieran mantener un marco estable de financiación”, afirma un portavoz de la Consejería de Educación, “pero a día de hoy el Ministerio de Hacienda no le ha dado a la Comunidad la previsión de ingresos del sistema de financiación para 2023, así que, para garantizar la financiación de las universidades, la propia Comunidad también debería tenerla”. En Aragón, sin embargo, el Gobierno acaba de cerrar un plan hasta 2026 de 1.082 millones con la Universidad de Zaragoza y en Castilla-La Mancha se ha firmado otro muy parecido. También en época de Esperanza Aguirre, el Gobierno madrileño firmó un plan de transición de gastos corrientes que se paró con la crisis económica.

“Las universidades, para tomar decisiones sobre su crecimiento o para hacer actividades, tienen que saber de cuánto presupuesto van a disponer en los años siguientes”, explica Fernando Casani, profesor titular de Economía en la Autónoma de Madrid. “Y Madrid da [un montante] cada año parecido, pero la universidad no tiene la garantía de saber que se repetirá. Y se enfrenta a problemas. Por ejemplo, ahora hay un desequilibrio muy grande entre



Estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid, en 2019. / INMA FLORES

Es la segunda región que más cobra y la que menos invierte por alumno

Las transferencias corrientes y de capital cayeron un 15,5% en diez años

el presupuesto eléctrico y lo que está pasando con las facturas”.

El diputado de Podemos en Madrid Agustín Moreno se indigna: “Sin dinero para pagar las nóminas o para renovar las infraestructuras, le estás atando un brazo a la universidad pública de Madrid, al mismo tiempo que potencias los chiringuitos privados”, asegura. En Madrid hay 13 universidades privadas, frente a 6 públicas. “Es una política suicida que hace que la universidad madrileña retroceda posiciones respecto a otras”.

El miércoles, representantes de la consejería y de los campus se reunieron para poner en marcha un plan de choque que permita, con las transferencias de capital que hace el Ejecutivo, cubrir el pago de las nóminas y hacer frente a la carestía eléctrica. Los

rectores calculan que necesitan 150 millones más para hacer frente a los gastos estructurales y poder dedicar lo que ingresan por tasas de matrícula a investigar u otras actividades. Luego discutirán los planes plurianuales.

En el último lustro, las universidades madrileñas han sobrevivido con el dinero que han ganado en los tribunales al Gobierno regional. Este, durante la presidencia de Esperanza Aguirre, recortó el Plan de Financiación 2006-2010 y el Plan de Inversiones 2007-2011 de forma unilateral y la tijera le ha salido muy cara, porque ha tenido que devolverlos con sustanciosos intereses. En diciembre de 2020, los campus públicos terminaron de cobrar los 574 millones adeudados, pero tienen hasta 2024 para gastarlos.

## Cuadrar presupuestos

“El origen del problema viene por la reducción de la aportación de la Comunidad de Madrid por la crisis financiera. Para poder cuadrar sus presupuestos, las universidades han ido utilizando los ingresos extraordinarios provenientes de las sentencias para el pago de parte de sus gastos corrientes, nóminas, electricidad...”, explica Casani. “Han ido aguantando porque han llegado sentencias favorables los últimos cinco años, pero ya se han ido terminando y al no haber otros ingresos extraordinarios les falta esa parte”.

El proyecto de ley de universidades del Gobierno de Cristina Cifuentes de 2018 ya contemplaba un plan de financiación plurianual. Pero la presidenta se equivocó al votar y la norma no salió adelante. Cifuentes dimitió 40 días después y su sucesor, Ángel Garrido, enterró el proyecto y con él toda posibilidad de seguridad financiera. Entre 2009 y 2019, las transferencias corrientes y de capital cayeron un 15,5% en Madrid, mientras que en Extremadura, Navarra, Andalucía o Baleares crecían, según los datos de CyD. Eduardo Sicilia, consejero de Universidades, volvió a incluir en su proyecto de norma el plan plurianual en 2020, pero Ciudadanos salió del Gobierno madrileño en marzo de 2021.